



Exp.: A/CSP-024616/2018

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Orden 1262/2021 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (en virtud del Decreto 42/2021 de 19 de junio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, BOCM 21 de junio de 2021, anterior Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno) por el que se establece el reequilibrio económico del expediente de contratación titulado “CONCESIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE EN EL PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO, ASÍ COMO DE LA MANUTENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES EN DICHA INSTALACIÓN”.

### ANTECEDENTES

I.- Mediante Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, de 3 de junio de 2019, fue adjudicado el contrato arriba referenciado a la empresa GRAP HOSTERÍA, S.L. (CIF: B86571684).

Realizada la formalización del mismo el 11 de junio de 2019, con un plazo de ejecución de 1 año, a contar desde el día 14 de junio de 2019, fue prorrogado por Orden nº 59/2020 de Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno desde el 14 de junio de 2020 hasta el 13 de junio de 2021.

El contrato y la prórroga, establecían las siguientes obligaciones económicas:

- GRAP HOSTELERÍA, S.L. deberá abonar la cantidad de 129.470,00 € (IVA incluido) en dos pagos de igual importe (50%). El primero de ellos se ingresará en el plazo de quince días siguientes a la entrada en vigor del contrato y el segundo en el plazo de siete días contados desde que se cumplan los seis meses desde la fecha de entrada en vigor del contrato.

- El servicio de manutención de los participantes en las actividades organizadas por la Dirección General de Deportes tendrá un porcentaje de descuento por servicio de comida de un 20% con respecto al precio que se indicó en la licitación (7,15 € IVA incluido) para un máximo de 17.880 servicios de comida. No obstante, solo se abonarán las comidas efectivamente servidas a demanda de la Administración.

II.- La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.

Todo ello supuso para GRAP HOSTELERÍA, S.L. el cese de actividad temporal de la Cafetería por orden administrativa, no pudiendo ofrecer sus servicios desde el momento en el que se decretó la suspensión de la apertura al público de los locales de hostelería el pasado 13 de marzo mediante la Orden 367/2020 de la Consejería de Sanidad de la CAM, y hasta el 14 de julio pasado, inclusive, fecha de apertura de las instalaciones a las que pertenece la Cafetería. Desde el día 15 de julio de 2020 quedó limitado el aforo en dichos locales, como resultado de la Orden 668/2020 publicada por la CAM el 19 de junio de 2020. A esto se unió la Orden 1178/2020 de la CAM publicada el 18 de septiembre de 2020, que establecía restricciones a la movilidad de la población.



Exp.: A/CSP-024616/2018

En consecuencia, todo esto, afectó negativamente a la afluencia de clientes por verse reducido el máximo de aforo permitido y la movilidad de las personas, así como el número de niños que asistieron a los campamentos en los meses de verano.

**III.-** Con registro de entrada número 09/430594.9/20, de fecha 5 de mayo de 2020, GRAP HOSTELERÍA, S.L. solicita la regularización de las condiciones económicas del contrato por motivos del COVID 19 con los siguientes reconocimientos:

- La imposibilidad temporal de ejecución del contrato.
- El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el mismo.

**IV.-** Con fecha 18 de junio de 2020 y registro de entrada 03/394860.9/20, GRAP HOSTELERÍA presenta solicitud de aplazamiento del primer pago del canon, correspondiente al contrato de prórroga y valora los gastos derivados del cierre de la Cafetería Restaurante hasta el día de la fecha de la siguiente manera:

- Salarios correspondientes al período del 14 al 31 de marzo de 2020 .....	13.632,85 €
- Seguros Sociales (14 de marzo al 31 de marzo de 2020) .....	4.157,29 €
- Ingresos dejados de percibir por ventas (14 de marzo a 7 de junio de 2020) .....	14.589,72 €
- Parte proporcional del canon (14 de marzo a 7 de junio) .....	25.210,96 €
- Parte proporcional Póliza de Seguro (14 marzo a 7 junio) .....	307,42 €
TOTAL .....	57.898,24 €

**V.-** Mediante Orden 236/2020 de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno, de 5 de junio de 2020, se reconoció la imposibilidad de ejecución del contrato y se suspendió la exigencia del pago de canon desde el 14 de marzo hasta la reapertura de las instalaciones, supeditada en todo caso hasta la resolución del expediente de reequilibrio económico.

**VI.-** Por Orden 512/2020 de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno, de 15 de octubre de 2020, se declaró la suspensión del abono del pago del canon correspondiente al período de prórroga del contrato hasta la resolución del procedimiento de restablecimiento del equilibrio de la concesión.

En base a dicha Orden, al día de la fecha quedan pendientes de abonar los dos importes correspondientes al período de prórroga, que suman un total de 129.470,00 € (IVA incluido).

**VII.-** Por Orden 327/2021 de la Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno, se suspendió el plazo de ejecución del contrato hasta la finalización de los trámites necesarios para hacer efectivo el reequilibrio económico del mismo.

**VIII.-** La Dirección General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y Deporte ha encargado un estudio económico a la consultora ARGÓN CONSULTORES, S.L. para determinar el valor económico del reequilibrio, con el resultado siguiente:

\*PERÍODO ESTADO DE ALARMA. (14 de marzo de 2020 – 20 de junio de 2020):



Exp.: A/CSP-024616/2018

Compensación total: 63.299,21 €

Calculo de valor de ampliación del plazo (15%): 19.257,17 €

Resultado: Ampliación del contrato en 55 días adicionales restan 44.042,04 €

\*PERÍODO DE ACTIVIDAD LIMITADA. (21 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020):

Compensación total: 70.793,28 €

Calculo de valor de ampliación del plazo (15%): 19.257,17 €

Resultado: Ampliación del contrato en 55 días adicionales y restan 51.536,11 €

En el procedimiento aplicado, desde el punto de vista del reequilibrio, se han distinguido dos análisis: la estimación del importe de compensación y el procedimiento de compensación empleable.

Respecto a la estimación del importe de compensación se han valorado dos conceptos: el lucro cesante y el daño emergente.

En el proceso de análisis del lucro cesante, se estima el total de la pérdida de ingresos netos de la Concesionaria, tanto de los ingresos netos “esperables” en el ejercicio 2020 en un escenario sin COVID-19, como de los ingresos netos reales obtenidos durante dicho ejercicio. En el proceso de estimación del daño emergente se tiene en cuenta el incremento de costes soportados y generados durante el ejercicio por causa de la crisis COVID-19.

### ANTECEDENTES DE HECHO

La Consejería de Presidencia, con fecha 2 de junio de 2021, ha dictado la Orden 179/2021, de 2 de junio, por la que resuelve restablecer el equilibrio económico financiero del contrato de gestión del servicio público de explotación de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, en relación a la temporada taurina 2020, y ordena un abono a cuenta correspondiente al restablecimiento parcial del equilibrio económico de la temporada taurina de 2021, en relación con los meses de noviembre y diciembre de 2020 de la misma.

En su Antecedente de Hecho séptimo indica:

*“Como consecuencia de la existencia de un reequilibrio previo, y de la confluencia de normativas distintas en relación a la misma temporada taurina de 2020, que amparan el reequilibrio de este contrato, bien conforme al TRLCSP y al RDL8/2020, derivado este último del Estado de Alarma, con fecha 12 de mayo de 2021 se solicita informe a los Servicios Jurídicos con objeto de clarificar la posibilidad de acordar sucesivos reequilibrios económicos del contrato de gestión del servicio público de explotación de la plaza de toros de Las Ventas. El informe, de fecha 18 de mayo de 2021, concluye que el espíritu y la teleología de artículo 34, apartado 4, del Real Decreto-ley 8/2020 permite considerar viable jurídicamente que, de concurrir las condiciones señaladas en dicho precepto, el reequilibrio pueda realizarse en distintas fases. Por tanto, para el supuesto en que, con el reequilibrio acordado mediante la Orden 201/2020, de 15 de septiembre, no se hubiera satisfecho el importe total de la pérdida de ingresos y del aumento de los costes soportados por el adjudicatario en el período de marzo a junio de 2020, con motivo de la suspensión de la apertura al público de las plazas,*



Exp.: A/CSP-024616/2018

*recintos e instalaciones taurinas, podría admitirse una nueva compensación por el importe pendiente, con sujeción a las previsiones del artículo 34, apartado 4, del Real Decreto-ley 8/2020, esto es, mediante la minoración o exoneración del canon correspondiente a otras anualidades distintas de la de 2020, siempre que fuera necesario para producir la compensación a la que obliga el meritado artículo 34, apartado 4.*

*Asimismo, el informe establece que el artículo 282, apartado 4, letra b), del TRLCSP permitiría amparar el reequilibrio sucesivo del contrato de gestión del servicio público de explotación de la plaza de toros de Las Ventas, con relación a un momento temporal distinto al contemplado en la Orden 201/2020, de 15 de septiembre, si las medidas adoptadas por la Administración de la Comunidad de Madrid en materia de salud pública hubieran determinado una ruptura sustancial de la economía del contrato, globalmente considerada. Con base en el artículo 282, apartado 5, del TRLCSP, el equilibrio podría ser restablecido, entre otros mecanismos, mediante el abono de una indemnización o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico.*

De igual forma, en su Fundamento de Derecho quinto, establece:

*Al amparo del artículo 34, apartado 4, del Real Decreto-ley 8/2020, habiéndose constado que con el reequilibrio acordado mediante la Orden 201/2020, de 15 de septiembre, no se ha satisfecho el importe total de la pérdida de ingresos y del aumento de los costes soportados por el adjudicatario en el período de marzo a junio de 2020, con motivo de la suspensión de la apertura al público de las plazas, recintos e instalaciones taurinas, procede acordar una nueva compensación por el importe pendiente, con sujeción a las previsiones del propio artículo 34, apartado 4, del Real Decreto-ley 8/2020, esto es, mediante la minoración del canon correspondiente a 2021.”*

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.** – El régimen jurídico de restablecimiento del equilibrio económico financiero del presente contrato está constituido, además de por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que lo regula, por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

**Segundo.** - No hay un plazo para instar el restablecimiento del equilibrio económico financiero, si bien de acuerdo con la doctrina del Consejo de Estado (Dictamen 3205/2003 de 20 de noviembre) el derecho prescribe por el transcurso de 4 años. No dándose esta circunstancia en el presente caso debe considerarse que la solicitud ha sido presentada en plazo.

**Tercero.** – Es sabido que, en todo contrato, con independencia de su naturaleza jurídica, se ha de procurar que las prestaciones que las partes se obligan a dar, entregar o recibir resulten equivalentes desde el punto de vista económico. Por ello, toda concesión de servicios exige unas reglas claras que preserven la equivalencia de las prestaciones en ambas partes, prestaciones que se deben diseñar pensando en la correcta ejecución del contrato, que dé





Exp.: A/CSP-024616/2018

seguridad a los potenciales licitadores sobre la viabilidad del negocio jurídico y dé, al propio tiempo, las garantías o certezas suficientes sobre el cumplimiento, en sus propios términos, de lo pactado.

Ese equilibrio o equivalencia de prestaciones, determinado inicialmente en el momento de celebrar el contrato, debe mantenerse posteriormente durante el tiempo que dure su ejecución, en aplicación del principio general de vigencia de las condiciones contractuales *rebus sic stantibus*. En los contratos de gestión de servicios públicos (aplicable a los modelos concesionales de la Directiva), como bien explicara ARIÑO ORTIZ, “el álea comercial tiene un doble alcance: hay un álea comercial ordinario que es el propio de toda explotación y cuya alteración en ningún caso es causa de revisión; pero junto a él hay lo que podríamos llamar un álea garantizado, en el sentido de que la Administración asume en todo caso los riesgos de pérdidas por debajo de un máximo, pero también controla y limita la ventura de unos beneficios extraordinarios por encima del máximo calculado”. El restablecimiento del equilibrio de las prestaciones se configura, por tanto, como la técnica que permite devolver a las partes a la situación inicial, cuando, durante la ejecución del contrato, falla el reparto de riesgos pactado.

La obligación de mantener la «equivalencia honesta del contrato administrativo» que funda el derecho del contratista al perfecto restablecimiento de la ecuación financiera del contrato como contrapartida de los poderes de la Administración, se ha afirmado expresamente en diversas sentencias del Tribunal Supremo, entre las que pueden citarse las de 9 de abril de 1968 (Ar. RJ 1968\3748), 22 de junio de 1970 (Ar. RJ 1970\3493), 6 de junio de 1975 (Ar. RJ 1975\3228), 8 y 27 abril, 25 mayo y 9 diciembre 1976 (Ar. RJ 1976\2324, RJ 1976\2407, RJ 1976\3018 y RJ 1976\5778), 30 de diciembre de 1983 (Ar. RJ 1983\6843), de 2 de diciembre de 1988 (Ar. RJ 1988\9451), 5 de octubre de 2004 (Ar. RJ 2004\7683), entre otras muchas.

Se acepta, por tanto, como inherente al concepto de riesgo operacional, la idea de equilibrio económico del contrato y su aplicación dinámica.

**Cuarto.** – Las concesiones administrativas, en este caso la concesión del servicio de explotación de la Cafetería-Restaurante en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, son contratos públicos que se caracterizan por presentar una traslación del riesgo operacional a los concesionarios (en este caso un riesgo de explotación principalmente). Si bien esta nota definitoria del contrato se incorpora normativamente a nuestro ordenamiento con la LCSP, había venido siendo considerada como tal por la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en múltiples sentencias.

Así por ejemplo en la STJUE 10 de marzo de 2011, Asunto C-274/09 Privater Rettungsdienst, cuando señala que: “(...) 26 Si bien el modo de remuneración es, por tanto, uno de los elementos determinantes para la calificación de una concesión de servicios, de la jurisprudencia se desprende además que la concesión de servicios implica que el concesionario asuma el riesgo de explotación de los servicios de que se trate y que la inexistencia de transmisión al prestador del riesgo relacionado con la prestación de los servicios indica que la operación en cuestión constituye un contrato público de servicios y no una concesión de servicios (sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 59 y 68 y jurisprudencia citada). 37. A este respecto, procede señalar que el riesgo de explotación económica del servicio debe entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres



Exp.: A/CSP-024616/2018

*del mercado (véase, en este sentido, la sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 66 y 67), que puede traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados, el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de octubre de 2005, Contse y otros, C-234/03, Rec. p. I- 9315, apartado 22, y Hans & Christophorus Oymanns, antes citada, apartado 74)."*

En este sentido, la obligación para la Comunidad de Madrid de restablecer el reequilibrio económico en el Período de Estado de Alarma del contrato viene exigida, en primer lugar, por el artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, que establece las medidas de desarrollo del estado de alarma en relación con los contratos públicos, y prevé como medida para atender la situación generada por la enfermedad en relación con los contratos de concesión e servicios, el restablecimiento del equilibrio económico financiero, recogiendo lo que con carácter general se establece en la normativa reguladora de la contratación del sector público para esta tipología contractual.

Por otro lado, y con posterioridad a la vigencia del Real Decreto-Ley 8/2020 y en relación al mismo restablecimiento, durante el Período de Actividad Limitada, resulta obligado atender lo establecido en la cláusula 24 del PCAP que lo rige, así como en la letra b) del apartado 4 del artículo 290 de la LCSP, precepto éste último en el que se recoge que la Administración deberá restablecer el reequilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, y, entre otros supuestos, cuando actuaciones de la propia Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario, determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, lo que sucede con la normativa autonómica limitante y restrictiva de la actividad del contratista. En este sentido, el artículo 290 de la LCSP, aplicable al contrato que nos ocupa, establece como posibles presupuestos del reequilibrio económico- financiero del contrato, la existencia de actuaciones de la Administración que determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, así como causas de fuerza mayor que determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.

Y ello porque no es el Estado de Alarma el único motivo que justifica el necesario reequilibrio financiero del contrato, sino toda la situación acaecida durante prácticamente todo el año 2020, que resultaba excepcional, imprevista y difícilmente asumible por el adjudicatario del contrato, y que se basa tanto en normativa nacional como regional, que imposibilitaron la ejecución del contrato.

La inhabilitación legal e imposibilidad material de ejecución del contrato de concesión de servicios que nos ocupa, deviene tanto de la declaración del estado de alarma, como de la adopción de medidas restrictivas o de suspensión de la actividad comercial, mercantil y, en especial, aquella orientada al público, tanto en relación a aforos como a limitaciones horarias y de movilidad acordadas por las autoridades competentes en Salud Pública que la Comunidad de Madrid fue adoptando mediante sucesivas órdenes de la Consejería de Sanidad.



Exp.: A/CSP-024616/2018

**Quinto.** – El principio de indemnidad de los contratistas en la ejecución de los contratos públicos, constituye el fundamento tanto de las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia, como de las previstas en la normativa reguladora de la compra pública, que, en el caso de las concesiones, como más arriba se ha indicado, se traducen en el restablecimiento del equilibrio económico financiero.

Pero este principio debe combinarse con el de prohibición del enriquecimiento injusto por tanto en la solución que se acuerde debe mantenerse incólume tanto el negocio planteado (dentro del traslado del riesgo que caracteriza las concesiones de servicios), pero sin que las medidas adoptadas superen esta finalidad, o alteren las características esenciales del negocio celebrado (en este caso, la explotación de la cafetería).

Procede una adaptación de los pactos y causa de los mismos a la nueva situación, sin alterar sustancialmente la arquitectura contractual.

**Sexto.-** La Dirección General de Deportes considera que entre las formas previstas para el restablecimiento del equilibrio, la que mejor responde a los objetivos de indemnidad y a los intereses públicos, es la de aplicar los resultados obtenidos del reequilibrio realizado para el “Período del Estado de Alarma”(63.299,21 €) en la ampliación del plazo concesional de 55 días adicionales (15%), que calculado en términos económicos es de 19.257,17€, cantidad que resulta inferior al importe del desequilibrio económico en 44.042,04 €, que será de aplicación en el siguiente reequilibrio, el del Período de Aforo Limitado.

Asimismo, al amparo del artículo 290, apartado 4, letra b) de la LCSP, procede acordar la compensación del “Período de Aforo Limitado”, que se encuentra bajo el marco normativo del citado precepto, al referirse a un momento temporal distinto al contemplado en el Real Decreto-Ley 8/2020.

De igual forma que en el período anterior y en base al apartado 5 del artículo 290 de la LCSP, se considera que para este período, entre las formas previstas para el restablecimiento del equilibrio, la que mejor responde a los objetivos de indemnidad y a los intereses públicos, es la de aplicar a los resultados obtenidos del reequilibrio realizado para el “Período de Aforo Limitado” (70.793,28 €) en la ampliación del plazo concesional en 55 días (15%) que calculado en términos económicos es de 19.257,17 €, cantidad que resulta inferior al importe del desequilibrio económico en 51.536,11 €.

**Séptimo.** - Procede, por tanto, realizar el reequilibrio económico financiero de la concesión de servicios desde que se decretó el estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, mediante la compensación total de 134.092,49€ (63.299,21€ + 70.793,28 €), calculada conforme a la justificación, desglose y contenido del informe realizado por la consultora ARGON CONSULTORES, S.L. y, a través de las siguientes medidas:

- La ampliación del plazo concesional en 110 días, como resultado de la suma del 15% de ampliación previsto legalmente para cada uno de los períodos (De Estado de Alarma y de Aforo Limitado).



Exp.: A/CSP-024616/2018

- La minoración, con respecto al canon de 2021 que se encuentra suspendido (129.470,00 €, IVA incluido), en la cantidad de 95.578,15 €, resultante de la suma de los importes no satisfechos con las ampliaciones de los plazos en ambos periodos.

En su virtud,

**DISPONGO**

**PRIMERO.** Aprobar, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4 del RD-ley 8/2020, así como en el artículo 290.4 b), de la LCSP y en el PCAP que rige la contratación, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de "CONCESIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE EN EL PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO, ASÍ COMO DE LA MANUTENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES EN DICHA INSTALACIÓN" (Expediente A/CSP-024616/2018), durante el período comprendido del 14 de marzo al 31 de diciembre de 2020 (Estado de Alarma y Aforo Limitado), por un importe de 134.092,49 €.

**SEGUNDO.** El restablecimiento del equilibrio económico financiero de la concesión, por su importe total de 134.092,49 €, se llevará a cabo, en primer lugar, con la ampliación del plazo concesional en 110 días (valorado en 38.514,34 €), y en segundo lugar con la minoración del canon correspondiente al período prorrogado en la cantidad de 95.578,15 €.

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
(P.D. Orden 41/2019, de 20 de noviembre, BOCM 3/12/2019)  
LA DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES

Firmado digitalmente por: BISTUER RUIZ CORAL ASTRID  
Fecha: 2021.10.23 18:16

Fdo.: Coral Bistuer Ruiz

*Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.*